



**NUE ACUM 1-A-2020 y 302-A-2019 (AG)**

**Bruno Arias contra el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)**

**Resolución definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte.

**Descripción del caso:**

I. El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por el ciudadano **Mario Dennis Bruno Arias** - en adelante "el apelante" -, contra las resoluciones de referencia 7798-2019 y 7888-2019, emitidas por la oficial de información del **Instituto Salvadoreño del Seguro Social** - en adelante "ISSS" -.

A. En la primera solicitud de información bajo referencia 7798-2019, emitida y notificada en fecha 26 de noviembre de 2019, el recurrente solicitó información sobre las siguientes personas que fungen como médicos empleados del ISSS: Ricardo Alfaro Barahona, Mabel Díaz Fiallos, Delmy Hernández, Rosa María López, Zoila Menjívar y Ricardo Antonio Minero Ramos; y en detalle requirió:

- a) *Fecha de ingreso laboral al ISSS de cada uno de ellos.*
- b) *Salario mensual de cada uno de ellos por año, desde su ingreso hasta la fecha actual.*
- c) *Si ha habido incrementos en el salario mensual de cada uno de ellos, desde la fecha de su ingreso hasta la actualidad, especificando claramente los motivos de cada uno de esos aumentos y haciendo referencia al número de acuerdo y fecha de sesión si se tratase de un aumento propiciado por acuerdo del Consejo Directivo del ISSS.*

Al respecto, señaló que la oficial de información del ente obligado resolvió – acerca de la información sobre la persona cuyo nombre fue proporcionado completo –: *"que de acuerdo a la información solicitada, la Jefatura del Departamento de Admisión y Empleo de Recursos Humanos envió nota en la que se proporciona respuesta a la solicitud de información N°7788; asimismo, se informó que su salario de contratación fue de 2,725*

colones, a partir de su fecha de ingreso, siendo su cargo actual *médico general del ISSS, cuyo salario actual se encuentra publicado en el estándar de remuneraciones del portal de transparencia*". Además señaló que, luego la referida Oficial hizo referencia a los enlaces del portal de transparencia donde se exponen las remuneraciones por cada plaza dentro del ISSS.

Aunado a lo anterior, se declaró inexistente la información de los señores: Ricardo Alfaro Barahona, Mabel Díaz Fiallos, Delmy Hernández, Rosa María López, Zoila Menjívar, en virtud del art. 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, *"debido a que el solicitante solo ha proporcionado un nombre y apellido o un nombre y dos apellidos y al buscarlos dentro del Sistema de Información de Recursos Humanos no son identificables como empleados del Instituto, siendo que para identificarlos se necesita contar con el nombre completo, ya que por los homónimos se puede proporcionar información de otras personas"*; lo anterior, según lo expuesto por la licenciada Sonia Lorena Bárcenas de Vásquez, Jefa del Departamento de Admisión y Empleo, mediante nota adjunta a la resolución impugnada.

Por su parte, el apelante se mostró inconforme con dicha resolución, pues considera que la oficial de información del ISSS otorgó información ambigua y distinta a la que realmente se solicitó, e intrínsecamente la deniega, puesto que la mera referencia a los enlaces donde se encuentra publicada dicha plaza no solventa su solicitud, pues él solicitó información específica de salarios por cada persona mencionada y en el sitio web solo están los salarios por plaza.

B. En la segunda solicitud de información bajo referencia 7888-2019, emitida y notificada en fecha 6 de diciembre de 2019, el recurrente solicitó información sobre las siguientes personas que fungen como médicos empleados del ISSS: María Milena Azucena de Guerra, Carlos Enrique Pérez Arce, Carlos Alberto Rivas Ayala, José Manuel Velado León, Simón Baltazar Ágreda Contreras y Rafael Reyes Rodríguez; y en detalle requirió:

- a) *Fecha de ingreso laboral al ISSS de cada uno de ellos.*
- b) *Salario mensual de cada uno de ellos por año, desde su ingreso hasta la fecha actual.*
- c) *Si ha habido incrementos en el salario mensual de cada uno de ellos, desde la fecha de su ingreso hasta la actualidad, especificando claramente los motivos de cada*

*uno de esos aumentos y haciendo referencia al número de acuerdo y fecha de sesión si se tratase de un aumento propiciado por acuerdo del Consejo Directivo del ISSS.*

Al respecto, señaló que la oficial de información del ente obligado resolvió entregar la información de forma incompleta y confusa, ya que solo hizo alusión a la misma de manera dispersa, sin detallarla por año y especificando únicamente que los aumentos realizados fueron producto de la negociación entre el ISSS y el STISSS. Luego, la referida oficial hizo alusión a los enlaces del portal de transparencia donde se publican las remuneraciones por cada plaza dentro del ISSS; finalmente, respecto de la información sobre los señores Simón Baltazar Ágreda Contreras y Carlos Alberto Rivas Ayala, señaló que no son identificables como servidores públicos del ISSS, por lo que declaró la inexistencia de la información.

Por su parte, el apelante se mostró inconforme con dicha resolución, pues considera que la oficial de información del ISSS otorgó información ambigua y distinta a la que realmente se solicitó, e intrínsecamente la deniega; puesto que la mera referencia a los enlaces donde se encuentran las remuneraciones del ISSS según cada plaza, no fue lo que se solicitó, pues claramente pidió información específica de salarios de cada una de las personas detalladas, haciendo hincapié en la secuencia de aumentos que hubieran tenido y los motivos de estos. Asimismo, agregó que él cuenta con prueba que desvirtúa la inexistencia de la información declarada como tal por la referida oficial de información.

C. Así las cosas, debido a la similitud advertida en la pretensión del apelante en ambas solicitudes, el Instituto admitió ambos recursos de apelación y se aplicó la figura de la acumulación. Así, ambos casos se tramitaron bajo el mismo procedimiento de referencia NUE ACUM 1-A-2020 y 302-A-2019 (AG), en virtud de los principios de economía y celeridad procesal, de conformidad con los arts. 3 numerales 5 y 6, y 79 de la LPA; asimismo, se designó al Comisionado **Andrés Grégori Rodríguez** para instruir el procedimiento y elaborar el proyecto de resolución.

En el informe de ley rendido por el ente obligado se manifestó en lo medular: i) que la oficial de información y respuesta del ISSS, de conformidad al art. 69 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), dirigió las peticiones a la Unidad de Recursos Humanos para que dicha unidad comunicare la clasificación de la información y remitiera la misma en la forma solicitada; ii) que tal como consta en los informes emitidos por el área de Recursos



Humanos, al consultar en el sistema de información que lleva esa unidad, de un registro de dieciséis mil empleados se logró individualizar únicamente a los empleados de los cuales se proporcionó datos completos; y una vez identificados, procedieron a proporcionar la información específica de salarios de contratación de los mismos encontrada en los registros históricos de la unidad; iii) que en relación a los salarios actuales y los incrementos obtenidos por los trabajadores que fueron identificados por la Unidad de Recursos Humanos, de acuerdo a lo establecido en el art. 62 de la LAIP, le indicaron al solicitante, el lugar donde se encontraban publicadas las remuneraciones y los contratos colectivos de trabajo del ISSS, en los cuales establecen los incrementos aplicados a los empleados de la institución; lo anterior, en virtud de ser información oficiosa, previamente publicada en el portal de transparencia conforme al art. 10 numerales 1 y 7; iv) que en relación a la inconformidad que tiene el solicitante por no recibir la información que solicitó, manifiesta que para la obtención de la información solicitada era indispensable la reconstrucción del historial de remuneraciones de cada empleado solicitado, lo cual implicaría generar la información en esos términos ya que no se posee de esa forma. Asimismo, implicaría la asignación de recursos humanos e insumos destinados única y exclusivamente para la búsqueda de registros históricos donde pueda ubicarse dicha información, y que lo anterior significa detener las actividades normales de la institución y destinar esfuerzos a una sola tarea para atender la petición de un ciudadano, lo cual hubiera afectado la agenda esencial de la institución y por ende a la función pública del ISSS; por tanto, estima que el procedimiento realizado por parte de la Institución estuvo apegado a derecho, de acuerdo al criterio de la Sala de lo Constitucional en la resolución de amparo 713-2015; vi) finalmente, señaló que presentará prueba documental en la etapa procesal pertinente y solicitó que se confirme la resolución emitida por la oficial de información del ISSS.

Finalizada la etapa de instrucción, se realizó la audiencia oral en la fecha y hora señalada, con la comparecencia del apelante **Mario Dennis Bruno Arias** y la apoderada especial del ISSS, licenciada **Ena Miriam López Herrador**, quien no alegó algún tipo de incidente para la no realización de la misma; y de igual forma, no ofreció elementos probatorios.

Por su parte, el apelante tampoco alegó algún incidente para la no realización de la audiencia oral; sin embargo, en la etapa de ofrecimiento de pruebas, ofreció como prueba

documental: “Nota suscrita por el entonces Director General del ISSS, Doctor Ricardo Cea Rouanet de fecha 22 de septiembre de 2015”, por medio de la cual pretende contrarrestar el argumento del ente obligado respecto de la inexistencia de la información. Seguidamente, el Pleno, previa deliberación sobre la pertinencia y utilidad de los medios ofrecidos y de correr traslado a la apoderada del ISSS, resolvió admitir la documentación ofrecida por el apelante, expresando los motivos de su decisión. Ante esta decisión tomada por el Pleno de Comisionados/as, no se interpuso recurso alguno.

En la fase de alegatos, la apelante expuso en lo medular: i) que la información solicitada fue debidamente delimitada, al establecer que los nombres de las personas relacionadas en sus solicitudes obedecían a médicos empleados de dicha institución; ii) que a pesar de que el ISSS ponga como justificante para no entregar la información que los nombres de los doctores no están completos, le parece un poco débil, pues no deberán comparar dichos nombres con toda una población, sino únicamente de los médicos en su base de datos; iii) que algunos de los nombres de los médicos si fue proporcionado de forma completo; iv) que la información colgada en el sitio web está detallada sin nombres, y él considera que su petición fue concreta al pedir un detalle cronológico de los médicos por nombres y apellidos; es decir, un desglose específico de los mismos y las modificaciones salariales que apliquen; v) que el IAIP debe analizar la desidia del ISSS de buscar la información en su base de datos; vi) en conclusión, considera que la información de su interés es de dominio público.

En la fase de alegatos, la apoderada del ISSS expuso en lo medular: i) que con fundamento en el arts. 62 y 10 numerales 1 y 7 se le proporcionó la respuesta al ahora apelante, respecto de lo que se cuenta en relación a lo requerido; ii) que tal como se mencionó en el informe de ley, ya la sala de lo constitucional en el proceso de amparo 713-2015, dar trámite a la solicitud del apelante en los términos solicitados, implicaría destinar a un grupo de empleados de distintas unidades de dicho ente para poder dar respuesta a su solicitud para la reconstrucción de un dato histórico de información con la que el ISSS no cuenta, lo que provocaría desatender las funciones inherentes a sus cargos; iii) que la información solicitada “es bastante amplia” y que no tienen seguridad respecto de lo que se tiene en la institución, porque pueda que no todo conste en el expediente; iv) que tienen un cúmulo de información que no han logrado actualizar, pero que ya con la información que proporcionó el apelante



analizaran que se puede hacer para ubicar lo demás, la información que se tiene es el salario inicial y final.

En la fase de alegatos finales, el apelante expresó en relación a lo expuesto por la apoderada del ente obligado: i) que no ha solicitado el historial de todos los empleados del ISSS; ii) que la sentencia 713-2015 no aplica para el caso en concreto, pues considera que la información si existe y que el ISSS cuenta con el personal suficiente; asimismo, cuentan con una unidad completa de Recursos Humanos, y en ese sentido, no deben requerir a nadie más para que dé respuesta a su requerimiento; iii) que decir que no existe la información solicitada es afirmar que todos los empleados del ISSS se encuentran en una incertidumbre laboral compleja, pues entonces no se tendría conocimiento de lo que hacen sus empleados; iv) que considera es atrevido decir que es inexistente, solo deben dedicar un tiempo para atender el requerimiento tal cual se ha pedido; por lo que finalmente solicita que se le entregue la información en los términos, calidad y especificación planteada en ambas solicitudes.

Por su parte, la apoderada del ISSS mencionó en lo medular: i) que la unidad de recursos humanos tiene otras funciones, más allá de atender el requerimiento; ii) que la información solicitada de algunos médicos, según le manifestaron a ella, en algunos casos data de “mil novecientos y algo” (Sic.), por lo que no es cierto que se ha dicho que la misma no exista, sino que realmente se dio lo que se tiene, pues de lo contrario tocaría realizar una investigación exhaustiva desde “mil novecientos y algo” (Sic.) de la información que se tenga en otros departamentos, dejando de lado sus actividades habituales, lo cual significa una alteración en el rol de la Institución; iii) por lo anterior, solicita que se confirme la información emitida por la oficial de información del ISSS, la cual se ha atendido del acuerdo a lo previsto en la LACAP.

En la fase de preguntas aclaratorias formuladas por el pleno a la representación del ente obligado, se formularon las siguientes: 1- ¿estas personas que entiendo son médicos, aún siguen siendo empleados médicos del ISSS? Respuesta: que según le informaron en la oficina, “sí”; 2- ¿usted afirmó que se tendría que buscar con mayor amplitud la información, es correcto? Respuesta: sí; ¿es decir, que si el apelante proporciona los dos nombres y apellidos, eso contribuiría a la búsqueda? Respuesta: “sí, pero como lo manifiesto, se podría dar de manera rápida el primer salario y el último, que es lo que se tiene, lo demás sería de

realizar la búsqueda en coordinación en los demás departamentos, habría que ver lo que existe, que es lo que hay. Sería una reconstrucción en sí del histórico laboral de cada uno”.

Al apelante se le consultó: ¿hizo usted alguna búsqueda en el portal? Respuesta: No, señor, Comisionado, yo conozco de la existencia de estos médicos en razón del proceso de amparo, del cual viene el documento [...] y por colegas que trabajan conjuntamente con ellos en el ISSS.

#### *Análisis del caso:*

Este Instituto advierte que el objeto de la presente apelación es pronunciarse sobre sí la información solicitada por el apelante debe ser entregada o no en virtud de existencia o no de la misma. De acuerdo a lo argumentado por el ISSS en lo expuesto, no se ha entregado en los términos solicitados por el apelante por no constar en los registros de dicho ente. En este contexto, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) La información inexistente y sus presupuestos; (II) análisis del caso en concreto frente a la inexistencia alegada por el ente obligado en relación a la información de carácter público; y, (III) la consecuente obligación o no de entregarla.

I. La información inexistente se constituye, básicamente, cuando esta no se encuentra en los archivos de la unidad administrativa que debería poseerla –Art. 73 de la LAIP–. No obstante, tal ausencia debe ser corroborada y comprobada por la persona que ejerce las funciones de Oficial de Información, tomando las medidas pertinentes para localizar lo solicitado; ya que la mera alegación de no localización resulta insuficiente para declarar su inexistencia.

En ese orden, la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentre en los archivos de la autoridad – es decir, se trata de una cuestión de hecho –; no obstante que la dependencia o autoridad cuente con las facultades para poseer dicha información. En este sentido, es de señalar que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Criterio /00015-09, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de México.



Sobre ello, este Instituto ya ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, que son: a) que nunca se haya generado el documento respectivo; b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción. En este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad por las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria.<sup>2</sup>

En este contexto, corresponde estudiar la primera causal de inexistencia, puesto que sería la más aplicable al caso en razón de las alegaciones hechas por el ISSS, ya que prácticamente, se está argumentando que la información no ha sido generada, y que para ser entregada al apelante, deben “paralizar” las funciones de ciertas unidades que podrían tener la información para luego reconstruirla de acuerdo a los términos históricos en que ha sido requerida por el apelante.

**II.** Bajo esa lógica, la forma idónea para verificar y comprobar que efectivamente no existe en sus registros la información que les fue solicitada, es a través de las diligencias de búsqueda que debió realizar el oficial de información para localizar la información en las unidades administrativas que pudieran tener en su poder tal información. Al respecto, corresponde analizar la documentación que obra en el expediente a efecto de determinar la veracidad de los argumentos planteados por el ISSS.

**A.** En primer lugar, se tiene lo resuelto por la oficial de información por medio de las resoluciones impugnadas, quien mediante la resolución 7798-2019, resolvió respecto de los médicos que no se proporcionó el nombre completo, a saber: Ricardo Alfaro Barahona, Mabel Díaz Fiallos, Delmy Hernández, Rosa María López, Zoila Menjívar, que no se encontró registros en el sistema, y en base a ello, declaró inexistente la información; asimismo, brindó parte de lo solicitado respecto del señor Ricardo Antonio Minero Ramos. Por otro lado, mediante la resolución 7888-2019, entregó parte de la información de los médicos: María Milena Azucena de Guerra, Carlos Enrique Pérez Arce, José Manuel Velado

---

<sup>2</sup> Resolución definitiva IAI 39-A-2013, emitida el 28 de octubre de 2013.



León y Rafael Reyes Rodríguez; y declaró la inexistencia de la información de los médicos, señores Simón Baltazar Ágreda Contreras y Carlos Alberto Rivas Ayala.

Posteriormente, mediante el informe de ley, la titular del ente obligado argumentó en lo medular, que la información no existe porque no la generan de esa manera, y argumenta que según la resolución de amparo 713-2015, cuando la tramitación de las solicitudes de información signifiquen una paralización a la agenda o funciones esenciales de una Institución, el requerimiento no debe ser atendido. Finalmente, señaló en el informe que ofrecería prueba documental al respecto en la etapa procesal oportuna; no obstante lo anterior, el ente obligado no aportó ningún elemento probatorio en ninguna etapa del proceso.

En esa línea, el ciudadano **Bruno Arias**, ofreció como prueba documental: “Nota suscrita por el entonces Director General del ISSS, Doctor Ricardo Cea Rouanet de fecha 22 de septiembre de 2015”, por medio de la cual pretende contrarrestar el argumento del ente obligado respecto de la inexistencia de la información.

Al respecto, visto y analizado el contenido de dicho documento y valorado que ha sido conforme a la sana crítica, se tiene por acreditado lo siguiente: a) que según la nota de fecha 22 de septiembre de 2015, suscrita por el entonces Director General del ISSS, Doctor Ricardo Cea Rouanet, se evidencia claramente que los señores María Milena Azucena de Guerra, Carlos Enrique Pérez Arce, Carlos Alberto Rivas Ayala, José Manuel Velado León, Simón Baltazar Ágreda Contreras y Rafael Reyes Rodríguez, sobre los cuales versa la solicitud de información 7888-2019, en esa fecha eran médicos empleados del ISSS; b) que constan los salarios que a esa fecha devengaba los señores médicos del ISSS: María Milena Azucena de Guerra, Carlos Enrique Pérez Arce, Carlos Alberto Rivas Ayala, José Manuel Velado León, Simón Baltazar Ágreda Contreras y Rafael Reyes Rodríguez, sobre los cuales versa la solicitud de información 7888-2019.

Durante la audiencia oral, la apoderada del ente obligado ratificó parcialmente, lo expuesto por la titular del ISSS en el informe de defensa rendido, en tanto primero alegan inexistencia y luego que la información se tiene, pero dispersa, y que no hay voluntad de “generar o reconstruir” la información en los términos solicitados por el apelante, según lo expuesto.



**B.** Expuesto lo anterior, es válido destacar que el art. 6 literal “a” de la LAIP otorga una definición al concepto de **información pública**, estableciendo que es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, base de datos, comunicaciones y todo tipo de registro que documente el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio.

En tal sentido, el derecho de información pública, permite al ciudadano/a ejercer una labor de fiscalización y contraloría respecto del actuar de la administración pública, en el entendido que su funcionamiento depende de fondos públicos, lo cual ha sido previamente establecido por este Instituto en el caso con referencia 103-A-2015 de fecha 11 de agosto de 2015, en el cual se afirmó: “el carácter de derecho fundamental del acceso a la información propicia el afianzamiento de democracias transparentes y efectivas, facilita la rendición de cuentas y genera un debate público permanente, sólido e informado. Desde esta perspectiva, el acceso a la información prepara a las personas para asumir un papel activo en el gobierno, mediante la construcción de una opinión individual y colectiva fundada sobre los asuntos públicos, lo que les permite una participación política mejor orientada, deliberante y responsable, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

De esa forma, debe entenderse que frente al caso que un ciudadano/a solicite información pública que no se encuentre dentro de la categoría de información pública oficiosa, la misma –en principio– deberá proporcionarse, garantizando el principio de máxima publicidad.

Lo anterior, da lugar a establecer que si bien la información oficiosa, por ley, debe estar a disposición del público –aun sin mediar solicitud de información–, la misma no constituye un bloque cerrado de información pública, sino más bien su publicidad promueve la participación ciudadana y puede propiciar una efectiva rendición de cuentas por parte de los entes obligados.

Ahora bien, en aplicación al presente procedimiento, es importante mencionar que el salario de los/as empleados/as de una institución pública con su determinación de nombre completo, si bien no es información pública oficiosa, en los casos en lo que se evidencia un

interés público en conocer los nombres de las personas en relación al cargo que ocupan y el salario devengado por ejercer dicho cargo. Por tanto, si la información detallada en el Art. 10 numeral 7 de la LAIP, relacionada con nombre y apellido por cada uno de los/as empleados/as de la Institución, no está publicado en el portal de transparencia, ello no significa que ante una eventual solicitud de información, dicha información no deba brindarse en los términos requeridos por algún solicitante, como en el caso de mérito.

III. Para este caso concreto, a criterio de este Instituto el ente obligado no supo acreditar y/o sostener una postura concreta respecto de la información solicitada por **Bruno Arias**, puesto que por un lado, expresaron que la misma “era inexistente” en los archivos del ISSS, lo cual para este ente colegiado es un argumento inaceptable que carece de fundamento, máxime cuando en la etapa de preguntas que se formularon durante la audiencia oral; y, por otro lado, a lo largo de los argumentos expuestos por la apoderada especial del ISSS, ya que, primero expuso de la inexistencia de la información y posteriormente que la información se encuentra dispersa en varias unidades y su unificación o reconstrucción implica que una o varias entidades del ISSS paralicen funciones. Finalmente, señaló que “nunca se ha dicho que la misma es inexistente”.

En tal sentido, este Instituto estima que lo solicitado no significa la paralización de las actividades ordinarias, como lo quiere hacer ver el ente obligado, puesto que lo petitionado recae únicamente sobre datos de doce médicos, y no de los dieciséis mil empleados que tiene el ISSS y no implicaría que una o varias unidades del ISSS paralicen sus funciones para poder atender el requerimiento del apelante..

Además, al analizar el presente expediente, el ISSS no ha expuesto de manera razonable, como se paralizarán las labores ordinarias que argumenta, pues para confirmar dicha justificación, tal como se sostuvo en la resolución del 25 de septiembre de 2019, en el procedimiento de recurso de apelación NUE 242-A-2018, los entes obligados deben de probar fehacientemente que carecen de los medios materiales para satisfacer el requerimiento, es decir, todas las acciones detalladas que deberán realizar para la preparación de la información en el formato requerido, y el **riesgo verdadero** que puede poner en una paralización **total** la función esencial del ente obligado, pudiendo afectar los derechos de otros/as particulares.



Entonces, en lo particular, se tiene por establecido que a esta fecha, no se ha entregado en su totalidad la información solicitada por el ciudadano **Bruno Arias**, ello con base a las alegaciones hechas por ambas partes durante la audiencia oral; por lo cual, valorándose el interés público y la naturaleza del derecho a la información pública, es pertinente proporcionar a la brevedad posible al apelante, la información solicitada en los términos requeridos por este; pues ello, constituye información pública, y su entrega favorece la contraloría social.

Por todo lo anterior, es procedente revocar la decisión tomada por el oficial de información del **Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)** y ordenar al ente obligado que proporcione: “la información sobre las siguientes personas que fungen como médicos empleados del ISSS: *Ricardo Alfaro Barahona, Mabel Díaz Fiallos, Delmy Hernández, Rosa María López, Zoila Menjívar; Ricardo Antonio Minero Ramos; María Milena Azucena de Guerra, Carlos Enrique Pérez Arce, Carlos Alberto Rivas Ayala, José Manuel Velado León, Simón Baltazar Ágreda Contreras y Rafael Reyes Rodríguez*; y en detalle: a) fecha de ingreso laboral al ISSS de cada uno de ellos; b) salario mensual de cada uno de ellos por año, desde su ingreso hasta la fecha actual; y c) si ha habido incrementos en el salario mensual de cada uno de ellos, desde la fecha de su ingreso hasta la actualidad, especificando claramente los motivos de cada uno de esos aumentos y haciendo referencia al número de acuerdo y fecha de sesión si se tratase de un aumento propiciado por acuerdo del Consejo Directivo del ISSS”; atendiendo a los términos en que ha sido requerida, por ser información de naturaleza pública, y en esos términos deberá ser entregada al apelante.

De igual forma, resulta necesario acotar que con esta resolución no se le está ordenando al ente a que entregue información que no ha sido “generada”, puesto que los datos que han sido solicitados por el apelante **Bruno Arias**, es información que debe constar en el expediente laboral de cada empleado, independientemente de la Institución Pública de que se trate; máxime cuando todos ellos – tal como lo manifestó la apoderada del ISSS durante la audiencia oral – siguen siendo empleados del ISSS; por tanto, sus expedientes laborales forman parte del Archivo que está a cargo y forma parte de los documentos que resguarda la Unidad de Recursos Humanos de dicho ente.

Ahora bien, si esa información no consta en el expediente laboral de dichos médicos, tácitamente el ISSS está revelando que no llevan un registro ordenado de los expedientes de cada uno de sus empleados, lo cual denota una negligencia en el seguimiento a la debida gestión documental y archivos a la que están obligados; es decir, que los mismos no cuentan con un tratamiento técnico archivístico de acuerdo a la normativa aplicable en dicha área. Aunado a ello, si el ISSS se ve en la necesidad de “hacer una reconstrucción del histórico laboral de dichos médicos”<sup>3</sup>, más allá de garantizar el derecho de acceso a la información del ciudadano apelante, es una oportunidad para que puedan dar el debido tratamiento y resguardar “toda esa información que se encuentra dispersa en otros departamentos”<sup>4</sup>, y ponerse al día con su obligación de cumplir con las medidas archivísticas correspondientes.

***Decisión del caso:***

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los artículos 6 y 18 de la Constitución, 52 inciso 3 °, 58 letras b, d y g; 94 y 96 letra “d” de la LAIP; y 79 y 80 del Reglamento de la LAIP, este Instituto resuelve:

**a) Revocar** las resoluciones bajo referencias 7798-2019 y 7888-2019 emitidas por la oficial del **Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)**, en fechas 26 de noviembre y 6 de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente.

**b) Ordenar** a la titular del **Instituto Salvadoreño del Seguro Social**, que en el plazo de **diez días hábiles** contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, entregue al ciudadano **Mario Dennis Bruno Arias**, la información sobre las siguientes personas que fungen como médicos empleados del ISSS: *Ricardo Alfaro Barahona, Mabel Díaz Fiallos, Delmy Hernández, Rosa María López, Zoila Menjívar; Ricardo Antonio Minero Ramos; María Milena Azucena de Guerra, Carlos Enrique Pérez Arce, Carlos Alberto Rivas Ayala, José Manuel Velado León, Simón Baltazar Ágreda Contreras y Rafael Reyes Rodríguez*; y en detalle: **a) fecha de ingreso laboral al ISSS de cada uno de ellos; b) salario mensual de cada uno de ellos por año, desde su ingreso hasta la fecha actual; y c) si ha habido incrementos en el salario mensual de cada uno de ellos, desde**

---

<sup>3</sup> Tal como fue manifestado por la apoderada del ente obligado durante la audiencia oral del presente caso.

<sup>4</sup> ídem

la fecha de su ingreso hasta la actualidad, especificando claramente los motivos de cada uno de esos aumentos y haciendo referencia al número de acuerdo y fecha de sesión si se tratase de un aumento propiciado por acuerdo del Consejo Directivo del ISSS”, por ser información pública, en línea con lo expuesto en la presente resolución.

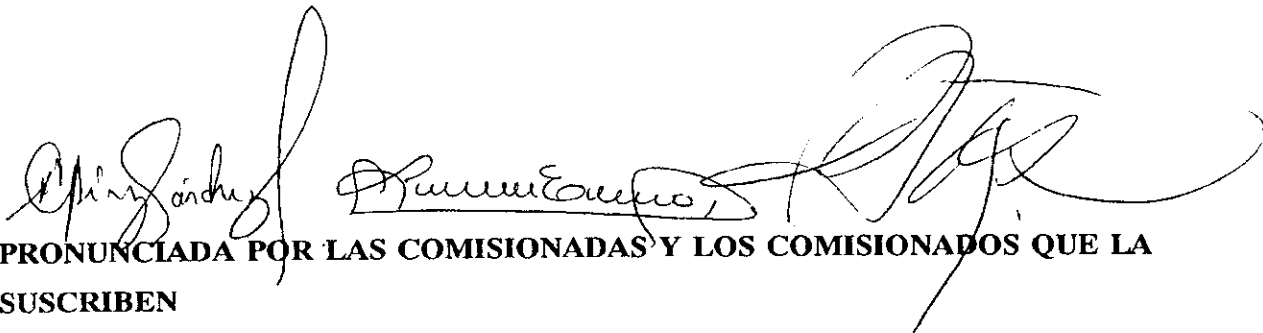
c) **Requerir** a la titular del **Instituto Salvadoreño del Seguro Social** que en el plazo de veinticuatro horas, luego de fenecido el plazo del literal anterior, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

d) **Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto, para que verifique la ejecución de esta resolución.

e) **Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

f) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

*Notifíquese. –*

  
**PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN**

JH/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil veinte.

  
José Augusto Hernández Funes  
NOTIFICADOR  
IAIP

